
ASESORIA EXTERNA 2024

NOVIEMBRE

SENADOR MATIAS WALKER PRIETO
SENADO DE LA REPÚBLICA

PROPUESTA INTERVENCIÓN SALA DEL PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA LA FISCALÍA SUPRATERITORIAL EN LA LEY N° 19.640, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES QUE REGULAN ACTUACIONES DE LOS FISCALES Y DE LAS FISCALÍAS REGIONALES. BOLETÍN N° 16850-07

En los últimos años, el avance de la delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción y delitos de alta complejidad en nuestro país ha sobreexigido a la institucionalidad, la que ha debido enfrentar la necesidad de adaptarse y responder efectiva y eficazmente estas estructuras criminales. La creación de la Fiscalía Supraterritorial responde a este fenómeno y tiene su origen en la reforma constitucional contenida en la Ley 21.644, publicada en febrero de este año y cuya vigencia está anexada a la aprobación de este proyecto de ley.

Tal como lo conocimos, las fiscalías regionales - enfocadas en el esclarecimiento de los delitos a nivel local-, no siempre cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar las redes criminales que operan en múltiples territorios del país, sobrepasando los límites regionales e inclusive, fronteras. Ante esta realidad, este proyecto de ley, que permite dar vida a la Fiscalía Supraterritorial, surge como una iniciativa necesaria y estratégica, creando un brazo especializado para enfrentar estas redes criminales.

Quisiera destacar su organización, dividida en macrozonas, cada una con jurisdicción sobre al menos dos regiones, lo que permitirá abarcar áreas de mayor extensión y enfrentar redes delictivas que operan más allá de los límites territoriales de las fiscalías regionales.

Este diseño innovador responde al problema estructural del Ministerio Público, cuya fragmentación en fiscalías regionales dificulta una acción coordinada frente a la delincuencia organizada. En

contraste, la Fiscalía Supraterritorial trabajará de manera integral, sin barreras territoriales, lo cual la dota de una visión más global de los fenómenos criminales. Esta estructura también incluye una serie de facultades que dotan de autonomía y recursos a la nueva fiscalía para liderar la persecución del crimen organizado.

Asimismo, hemos compartido la preocupación del Fiscal Nacional en relación a la coordinación efectiva que debe caracterizar al Ministerio Público. En este sentido es un avance que, en sus normas, se le asigne al fiscal nacional una serie de nuevas atribuciones que le permitirán gestionar, coordinar y guiar el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial. Entre ellas, destaca la capacidad de impartir instrucciones particulares al fiscal jefe de esta nueva unidad, designar y remover al titular de la misma, y resolver conflictos de competencia que surjan con las fiscalías regionales. Además, el fiscal nacional podrá decidir que la Fiscalía Supraterritorial asuma directamente la investigación de ciertos casos críticos, lo cual le otorga un rol central en la dirección de la política criminal del país.

Estas nuevas competencias son esenciales para otorgarle al fiscal nacional la capacidad de tomar decisiones sobre investigaciones específicas, se garantiza que aquellos casos que tengan relevancia a nivel nacional o que revistan una alta complejidad se aborden con una mirada estratégica. Así, se busca un equilibrio entre la autonomía operativa de la Fiscalía Supraterritorial y la coordinación general del Ministerio Público, lo cual es esencial para evitar reiterar la problemática actual sobre fragmentación en las investigaciones.

Uno de los cambios más significativos del proyecto es la creación de un sistema especializado en el análisis criminal para delitos de crimen organizado y alta complejidad. Este sistema reemplazará el actual sistema, unificando los equipos de fiscales dedicados a estos temas en una única unidad de analistas. Este cambio estructural es fundamental, ya que dotará a la Fiscalía Supraterritorial de una base de datos y de herramientas de inteligencia que faciliten la investigación y persecución de redes criminales.

Lo anterior, tal como se ha conocido durante la discusión de esta materia, responde a la experiencia internacional, la que ha demostrado que la persecución penal de estas redes requiere no sólo una acción judicial ágil, sino también el uso intensivo de inteligencia y análisis criminal. Con esta nueva estructura, la Fiscalía Supraterritorial podrá anticiparse a los movimientos de las redes delictivas, fortalecer su capacidad de respuesta y dotarse de una visión integral de los fenómenos de criminalidad.

Y, con el objeto de contribuir al fortalecimiento del ejercicio de la actividad del Ministerio Público, el proyecto también define con claridad las áreas de competencia de la Fiscalía Supraterritorial,

limitando su accionar a delitos particularmente complejos y de relevancia nacional o transnacional, mediante criterios de competencia, como: la existencia de antecedentes que permitan presumir la intervención de asociaciones delictivas o criminales en dos o más regiones; y los delitos cometidos fuera del territorio nacional, siempre que tengan repercusiones en el ámbito interno.

Por último, el proyecto también prevé la creación de una estructura funcional para la Fiscalía Supraterritorial, lo cual incluye la asignación de fiscales, analistas y personal especializado. Además, se establece una normativa de coordinación entre esta nueva fiscalía y las fiscalías regionales, lo cual es fundamental para lograr sinergias en la persecución penal. Sin duda alguna, estas normas resultan muy concatenadas con la actual discusión de la Ley de Presupuesto, toda vez que el éxito de esta fiscalía dependerá en gran medida de la correcta asignación presupuestaria, de la capacitación continua de su personal y de la implementación de tecnología avanzada en análisis criminal.

Por lo expuesto, manifiesto mi votación favorable, advirtiéndole que este proyecto representa el cambio más significativo en el diseño institucional del Ministerio Público desde su creación, respondiendo a una legítima demanda de contar con herramientas idóneas para enfrentar el crimen organizado en sus diversas formas. Esta iniciativa no solo busca reforzar la seguridad ciudadana, sino también fortalecer la capacidad del Estado para llevar adelante investigaciones penales rigurosas, esenciales para proteger nuestra institucionalidad democrática ante estas amenazas que buscan socavarla..

PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA LA FISCALÍA SUPRATERITORIAL EN LA LEY N° 19.640, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES QUE REGULAN ACTUACIONES DE LOS FISCALES Y DE LAS FISCALÍAS REGIONALES. BOLETÍN N° 16850-07

I. Introducción

El presente informe tiene por objeto exponer el contenido, objetivo y estado de avance del proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales relacionados con las actuaciones de los fiscales y fiscalías regionales. La iniciativa, de origen en un mensaje del Presidente de la República, cumple su segundo trámite constitucional en el Senado y busca introducir cambios estructurales al diseño institucional del Ministerio Público para enfrentar de manera eficaz los delitos de crimen organizado y alta complejidad.

II. Antecedentes Generales

Ingreso y Tramitación

Este proyecto de ley fue ingresado a trámite legislativo el 28 de agosto de 2024, siendo derivado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y eventualmente a la Comisión de Hacienda.

Audiencias y Participación

Durante su análisis, la Comisión escuchó a representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público, a académicos de universidades nacionales y a la Asociación de Fiscales, lo que permitió un examen exhaustivo de sus implicancias.

III. Objetivo del Proyecto de Ley

El proyecto tiene como propósito principal la creación de la Fiscalía Supraterritorial dentro de la estructura del Ministerio Público, cuya función será la investigación y persecución de delitos complejos relacionados con asociaciones delictivas y que requieran una coordinación supraterritorial o transnacional.

Para ello, se propone:

Modificar la Ley N° 19.640 y otros cuerpos legales relevantes.

Establecer la estructura funcional y de personal de la nueva Fiscalía.

Dotar al fiscal nacional de herramientas específicas para dirigir esta unidad de manera eficiente.

Reforzar el sistema de análisis criminal y focos investigativos, transformándolo en un sistema especializado en crimen organizado y delitos de alta complejidad.

IV. Estructura Legislativa

El proyecto consta de ocho artículos permanentes y tres transitorios que modifican:

Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Código Procesal Penal.

Leyes relacionadas con probidad, lobby, protección a menores víctimas de delitos sexuales y desempeño del Ministerio Público.

V. Principales Aspectos del Debate Parlamentario

Entre los puntos centrales abordados por la Comisión se destacan:

Atribuciones y Competencias

La ampliación de facultades otorgadas a la Fiscalía Supraterritorial y su concordancia con las competencias de los fiscales regionales y el fiscal nacional, en el marco de los artículos 18 y 19 de la Ley N° 19.640.

Criterios de Gravedad y Complejidad

La necesidad de definir con precisión los criterios normativos para determinar cuándo un delito requiere la intervención de la Fiscalía Supraterritorial o la designación de un fiscal regional en virtud del artículo 19.

Autonomía y Coordinación

La armonización entre la autonomía funcional de las fiscalías regionales y la dirección estratégica que se confiere al fiscal nacional en la persecución del crimen organizado.

VI. Fundamentación del Ejecutivo

El Ejecutivo destaca que la creación de la Fiscalía Supraterritorial representa el cambio más significativo en el diseño del Ministerio Público desde su creación, permitiendo enfrentar delitos complejos mediante un enfoque especializado y sin limitación territorial.

Además, se subraya que la medida está alineada con el artículo 86 bis de la Constitución, que dispone que esta nueva fiscalía tendrá por objeto exclusivo la investigación de delitos que involucren asociaciones criminales o que requieran una acción coordinada a nivel nacional o internacional.

VII. Requisitos para su Aprobación

Dado que el proyecto incluye disposiciones de rango orgánico constitucional, su aprobación requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, conforme al artículo 66 de la Constitución.

Comentarios.

La creación de la Fiscalía Supraterritorial constituye un avance sustantivo en la capacidad del Ministerio Público para enfrentar delitos de alta complejidad y crimen organizado, marcando un punto de inflexión en la evolución de nuestra institucionalidad persecutora. Este proyecto responde a la necesidad urgente de contar con herramientas más especializadas y flexibles para abordar fenómenos delictuales que trascienden los límites territoriales de las fiscalías regionales, fortaleciendo así la eficacia del sistema de justicia penal.

El diseño propuesto, que concentra en el fiscal nacional la potestad de impartir instrucciones específicas al jefe de la Fiscalía Supraterritorial, es un paso necesario para garantizar una coordinación estratégica frente a delitos particularmente complejos. Esta centralización de facultades permite focalizar recursos y esfuerzos, asegurando una respuesta más efectiva y homogénea ante fenómenos delictuales que requieren una visión supraterritorial o incluso transnacional.

Además, el fortalecimiento del sistema de análisis criminal como herramienta especializada para el crimen organizado refuerza la capacidad del Ministerio Público de adaptarse a las nuevas dinámicas delictuales. Este enfoque no solo incrementa la precisión en la persecución penal, sino que también contribuye a optimizar el uso de los recursos disponibles, un aspecto crucial considerando la alta demanda que estos delitos generan sobre el sistema de justicia.

Es importante destacar que este proyecto responde a una demanda histórica: superar las limitaciones del modelo regionalizado frente a ilícitos de carácter complejo y brindar una respuesta adecuada a las expectativas ciudadanas en materia de seguridad y justicia. La creación de esta nueva estructura no solo mejora la capacidad operativa del Ministerio Público, sino que también refuerza la legitimidad institucional al ofrecer un modelo de persecución penal más coherente y especializado.

Sin embargo, el éxito de esta reforma dependerá de garantizar la adecuada dotación de recursos para la Fiscalía Supraterritorial, tanto en términos financieros como humanos. Es fundamental que la implementación de esta iniciativa sea acompañada de un plan de fortalecimiento presupuestario y de capacitación que permita a los equipos estar a la altura de los desafíos técnicos y operativos que enfrentará esta nueva unidad.

Asimismo, aunque la concentración de facultades en el fiscal nacional es un aspecto positivo para la dirección estratégica, debe complementarse con mecanismos que refuercen la transparencia y la rendición de cuentas, minimizando posibles tensiones con la autonomía funcional de las fiscalías regionales. Establecer criterios claros y precisos sobre los casos que deben ser asumidos por la Fiscalía Supraterritorial también contribuirá a asegurar una implementación armónica de la reforma.

EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, ORIGINADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY N° 20.019, QUE REGULA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS PROFESIONALES, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y DE FOMENTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS HINCHAS EN LA PROPIEDAD DE LAS MISMAS.

BOLETÍN N° 10634-29

Autores: diputados Matías Walker, Jaime Pilowsky, Pedro Browne, Marcelo Chávez, Iván Fuentes, Daniel Melo, Alberto Robles, Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez y Camila Vallejos

Idea Matriz

Modificar la ley N° 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, con el objeto de modernizar el actual modelo de regulación de las sociedades anónimas deportivas profesionales, estableciendo mayores facultades de fiscalización a todos los clubes por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, limitando los conflictos de interés y entregando la posibilidad a los clubes deportivos de capitalizar e inyectar nuevos recursos a los clubes a través del ingreso de los hinchas a la propiedad de las referidas sociedades y su respectiva administración real.

ANTECEDENTES DE HECHO

El año 2005 se promulgó la Ley N° 20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. En dicho cuerpo legal, se establece que las SADP son aquellas organizaciones que tienen por objeto organizar, producir, comercializar y participar en espectáculos deportivos y que se encuentren incorporados en el Registro de Organizaciones Deportivas Profesionales, administradas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile.

Las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales abiertas, son fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, la cual inspecciona los presupuestos y estados financieros,

solicitando cada trimestre informes del capital de funcionamiento, certificados de pago de obligaciones laborales y previsionales y declaración de responsabilidad.

La Ley N° 20.019 se forja en un contexto de decaimiento de los clubes, los cuales eran víctimas de robos, desfalcos de dineros, quiebras y estafas que no tenían ningún tipo de regulación. Dichos elementos hicieron necesaria la apertura de un nuevo paradigma, permitiéndoles a los Clubes, ser una Sociedad Anónima ya sea abierta o cerrada.

Lamentablemente, al día de hoy, no todos los clubes son Sociedades Anónimas Abiertas, siendo principalmente los tres clubes más grandes (Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo) los que se acogieron a esta modalidad. El hecho de que si un Club es o no es Sociedad Anónima abierta, significa que los hinchas de manera libre podrán transar acciones en la bolsa, fortaleciendo las arcas del club con mayores posibilidades de conseguir más capital y socios; además de ser fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En el caso de una Sociedad Anónima cerrada, sólo serán unos pocos actores los capacitados para resolver en las decisiones de la institución y sin mucha posibilidad de alimentar el aspecto financiero de la misma.

Hace once años, se esperaba que el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales ordenara el estado en el que se encontraban los clubes, siendo organizaciones más reguladas, exigentes y con una fiscalización más eficiente, pero lamentablemente, se prestó para cerrar las instituciones, reduciendo la participación de los hinchas en las decisiones importantes y privando de información a los mismos.

Actualmente se establece con fuerza que las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales fracasaron, los "clubes grandes" adeudan el doble de lo que debían en 2008, y el 85% del total están cerca de la quiebra, generando un perjuicio a los clubes locales; tal como pasa hoy en día con Deportes Concepción, quien fue desafiliado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Además, se plantea que la sumisión de los Clubes a los flujos del dinero, colocó en segundo plano la identidad de los hinchas con sus clubes e hizo primar al dinero por sobre todas las cosas, estableciéndose una relación meramente formal entre la institución con sus seguidores, sin una afinidad entre humanos y menos entre aficionados, posicionando el pensamiento que "más que una familia, somos clientes", perdiendo toda la esencia de la actividad y sus valores que lo sustentan y debiesen proyectar.

LOS ACTUALES PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LOS CLUBES CHILENOS

Si bien el antiguo modelo de las corporaciones sin fines de lucro tenía muchos problemas, los que ya señalamos anteriormente, estos no han cambiado desde el punto de vista financiero. Santiago Wanderers, Cobreloa y Deportes Concepción están a punto de declararse en quiebra, Puerto Montt ha incumplido repetidamente su obligación de pago a los jugadores, existiendo extremos tan insólitos y poco decorosos como que en Lota Schwager los hinchas han tenido que organizar colectas para ayudar a los futbolistas con dinero y alimentos.

Los clubes han sido utilizados para fines comerciales, como lo es la triangulación de jugadores en la que incurrió San Felipe y Rangers; y a través de familiares, algunos actores se han hecho de la propiedad de variados clubes, sin existir control por parte de las autoridades por no tener las facultades fiscalizadoras necesarias, sobre todo por ser éstas sociedades anónimas cerradas.

Todo esto sin incluir la corrupción que se ha ido destapando de la anterior gestión de la Asociación de Fútbol Profesional

Por esto, podemos sostener que hoy en día el fútbol chileno no se mantiene gracias a la actual estructura societaria de los clubes, sino que por los dineros del Canal del Fútbol, especie de caja pagadora a la cual todos los clubes concurren para solventar sus gastos y salvar sus administraciones mes a mes.

De esta situación ni siquiera se salvan los equipos más populares, de hecho Blanco y Negro solo ha operado con ganancias una vez: en 2008, luego de las ventas de Matías Fernández y Arturo Vidal. Azul Azul, por su parte, solo en el 2012, después del triunfo en la Sudamericana y la venta de Eduardo Vargas a Italia.

La deuda del Club Social y Deportivo Colo Colo, que originó la quiebra del club e impulsó la entrada de las sociedades anónimas, aún no ha sido cancelada. Según su último Estado Financiero disponible, el pasivo original con el Fisco de 22 mil millones ha disminuido a 17 mil millones. Esto porque el contrato de concesión estipula que Blanco y Negro S.A. solo utilizará un porcentaje de 3% de los ingresos para cancelar el monto.

Presentación proyecto del entonces Diputado Matías Walker Prieto

Este proyecto fue pensado en los hinchas del fútbol, por ello se tuvo presente a los hinchas de diversos clubes del país, porque sabemos que los mayores perjudicados por los malos manejos son los hinchas, quienes pierden la posibilidad de ver a sus clubes jugar semana a semana:

1. Colo-Colo, promotores de esta iniciativa legislativa.
2. Club de Deportes Ovalle, que descendió de categoría por la irresponsabilidad de sus dirigentes al no pagar las cotizaciones de sus futbolistas.
3. Club de Deportes Concepción, donde analizamos el impacto de su desafiliación, que castigó injustamente a toda una ciudad debido a la mala gestión de algunos dirigentes.
4. Santiago Wanderers, cuyos hinchas sufrieron las promesas incumplidas de un importante aporte de capital, demostrando que el fútbol no puede depender de mecenas o prestamistas.
5. Universidad Católica, cuyos hinchas exigimos cada domingo una reducción en los precios de las entradas.
6. Coquimbo Unido, donde los hinchas ya participan activamente en las decisiones del club a través de su corporación.
7. Club de Deportes La Serena, que han demandado el fin de los conflictos de interés entre representantes y dueños de los clubes.

Propuestas con las que surge el proyecto

- Prohibimos la participación directa o indirecta de representantes en la propiedad de los clubes, eliminando conflictos de interés que perjudican al fútbol.
- Impedimos que los dirigentes sean dueños, a través de familiares o empleados, de más de un club, lo que constituye un acto contrario a la ética deportiva.
- Proponemos que los socios puedan adquirir acciones de sus clubes, siguiendo el modelo alemán, para que tengan voz en los directorios.
- Establecemos que las comisiones de hinchas sean obligatorias, con representantes elegidos por los propios aficionados, bajo el marco de la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol.

Así, se presenta un proyecto que, mediante cuatro artículos, efectúa diversas modificaciones en la ley N° 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales:

Artículo 1 se modifica el artículo 16 del mencionado cuerpo legal, en orden a establecer que las sociedades anónimas deportivas profesionales podrán constituirse como sociedades anónimas abiertas o cerradas, y establece que se someterán siempre a las reglas de las abiertas para los efectos de su fiscalización por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Artículo 2 reemplaza el artículo 21, consagrando nuevas reglas para la participación accionaria en la propiedad de las referidas sociedades, señalando que ningún accionista por sí o a través de sus consanguíneos o afines hasta el tercer grado, o a través de personas jurídicas que participen en su propiedad en cualquier proporción, podrá poseer un porcentaje igual o superior a 20 por ciento de las acciones.

Artículo 3 se permite que las corporaciones o fundaciones sin fines de lucro que a la entrada en vigencia de la ley N° 20.019 sigan desarrollando actividades deportivas en ese carácter, puedan optar a desarrollar esa actividad también como corporaciones o fundaciones de derecho público sin fines de lucro.

Artículo 4 agrega un artículo 5º transitorio, que permite a las sociedades anónimas deportivas profesionales emitir una nueva serie de acciones o traspasar legalmente las existentes, las que solo podrán ser suscritas por los socios o miembros al día de las corporaciones o fundaciones que dieron origen a cada club.

Del proyecto de ley

Entre los cambios que se le incorporan se fortalece el proyecto, entre sus normas, se establece que las sociedades anónimas deportivas, aunque sean cerradas, se rijan por las normas de las sociedades anónimas abiertas en términos de fiscalización y publicidad; se establece un límite máximo de doce años para las concesiones, evitando la perpetuación de contratos que privan a los hinchas de control sobre sus clubes; se incorporan facultades adicionales de fiscalización para el IND, que podrá aplicar multas, llenando el vacío entre amonestaciones y la pérdida de categoría.

En consecuencia, las modificaciones a la Ley N° 20.019, consisten en:

La moción tiene como objetivo modernizar el modelo de regulación de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales mediante:

- Mayores facultades de fiscalización: Se otorgan a la Comisión para el Mercado Financiero (anteriormente Superintendencia de Valores y Seguros).
- Prevención de conflictos de interés: Aplicable a dueños de clubes, mandatarios, y representantes de jugadores de fútbol.
- Apertura a nuevos recursos: Los clubes deportivos podrán capitalizar mediante la participación de hinchas en la propiedad y administración.

2. Contenido

La propuesta original fue objeto de modificaciones en la Cámara tras las indicaciones del Ejecutivo y de diversos diputados:

- Texto aprobado por la Cámara de Diputados:

-
- o Artículo 1°: Introduce diversas modificaciones a la Ley N° 20.019.
 - o Artículo 2°: Interpreta el inciso segundo del artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.019.

3. Propuesta

- Modificaciones contenidas en el Artículo 1°, que introduce diversas modificaciones a la Ley N° 20.019.

Artículo 1°. Promoción de Valores en ODP

- o Amplía los objetivos de las ODP para incluir la participación masiva, integración social, desarrollo comunitario, equidad de género, y cuidado de la salud.

Artículo 11. Participación y Designación en Órganos Representativos

- Los integrantes de órganos representativos serán designados por los socios de las corporaciones o fundaciones originarias.
- Si estas entidades no existen, los miembros serán elegidos por quienes hayan sido socios al momento de su extinción.

Nuevo Artículo 11 bis. Equidad de género y representación comunitaria

Las organizaciones deportivas profesionales deben establecer comisiones u otras instancias formales para canalizar los intereses de los asistentes a espectáculos de fútbol profesional.

- Cambios introducidos:
 - Las comisiones pueden ser de carácter femenino y/o masculino.
 - Deben incluir al menos 15 representantes de la comunidad deportiva, designados por socios o miembros de las corporaciones o fundaciones que dieron origen a la organización.
 - Los estatutos deberán incluir medidas de equidad de género en todas las áreas de desarrollo deportivo.
 - Plazo para reglamentación: Seis meses desde la entrada en vigencia de la ley.

N° 13: (Son LOC) Punto 10 del nuevo artículo 39 ter e Inciso cuarto del nuevo artículo 39 quáter.

Fundamento: Inciden en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, conforme a los artículos 77 de la Constitución Política y 16 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.918.

Artículo 14. Gestión patrimonial y reorganización

- Se detalla el procedimiento para regularizar déficits patrimoniales.
- Si no se regulariza dentro del plazo, se debe iniciar un proceso de reorganización empresarial judicial.
- En caso de liquidación, se protege la continuidad como unidad económica si los acreedores lo acuerdan.

Se sustituye la obligación de terminar con el déficit en tres meses con un nuevo proceso que incluye:

- Informar al organismo fiscalizador dentro de tres meses si ocurre una disminución patrimonial significativa.

-
- Regularizar el déficit en tres meses; si no se logra, someterse a las disposiciones del capítulo III de la Ley N° 20.720 en un plazo de 60 días.

Si no se cumple este procedimiento, los acreedores pueden solicitar la liquidación forzosa de la organización, permitiendo:

- Acogerse a un procedimiento concursal de reorganización.
- Continuar la actividad y venta como unidad económica en acuerdo con los acreedores.

Artículo 15. Impedimentos para Ser Director en SADP

- Prohíbe ser director de SADP a personas condenadas por delitos graves, como los contemplados en la Ley N° 18.045 (Mercado de Valores).
- Extiende a cinco años la prohibición para directores o miembros de otras entidades deportivas que compitan en la misma liga.

Sustitución en el artículo 22 sobre instrumentos emitidos por el Banco Central, ajustándose al Capítulo III de la Ley N° 20.720.

Artículo 23 bis:

Obliga a incluir en el directorio de las SADP a un miembro de los órganos representativos con derecho a voz y voto, elegido por sus integrantes.

Artículo 25. Organización y Responsabilidades de las ODP. Constitución y continuidad de las Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP)

- Permite que las nuevas ODP se constituyan como corporaciones o fundaciones bajo el requisito de ser Fondo Deportivo Profesional.
- Se responsabiliza a las SADP por las obligaciones laborales de los clubes que administran.
- Actos jurídicos, como cesión o concesión de bienes y derechos federativos, deben realizarse exclusivamente con otras organizaciones deportivas profesionales.
- Concesiones de uso y goce de bienes no podrán exceder de 12 años, aunque pueden renovarse.
- Nuevas restricciones en contratos de concesión, prohibiendo cláusulas que responsabilicen a las entidades cedentes por obligaciones contraídas durante la concesión. Se prohíbe incluir en los contratos de concesión cláusulas que transfieran responsabilidades de la concesionaria a la cedente tras la extinción del contrato.

Reemplazo en el artículo 35 respecto al estado de notoria insolvencia del Fondo.

Sanciones e infracciones

Artículo 39:

- Regula las sanciones aplicables por infracciones a la ley N° 20.019.
- Se establece una medida de suspensión como sanción y se aclaran sus alcances.

Artículos 39 bis, 39 ter y 39 quáter:

-
- Detallan el procedimiento sancionatorio que será llevado a cabo por el Instituto Nacional del Deporte.
 - Se regula el recurso de reclamación de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

Nuevo artículo 2° bis transitorio, estableciendo:

- Plazo máximo de 30 años para el pago de deudas tributarias.
- Condonación única del 90% de intereses y multas para obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 2016.

Artículo Quinto Transitorio. Incorporación de Hinchas en la Administración de las SADP

Las SADP podrán emitir nuevas series de acciones suscritas únicamente por socios o miembros al día de las corporaciones o fundaciones que dieron origen al club. **Objetivo:** Recuperar legitimidad de las SADP ante la comunidad deportiva.

- Artículo 2°: Interpretación del inciso segundo del artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.019.

RECHAZADO EN SALA (PAG 7 COMPARADO)

Artículo 21 (N° 7 del artículo 1°): Propiedad accionaria en Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

- Solo se podrá ser accionista de una SADP quienes cumplan con las disposiciones legales, incluyendo consanguíneos o afines hasta el tercer grado.
- Infringir esta norma conllevará una prohibición de cinco años para participar en cualquier SADP.
- (Diputado Matías Walker): Prohíbe a agentes, mandatarios y socios de empresas de representación de jugadores de fútbol adquirir directa o indirectamente acciones de SADP. Contravenir esta norma acarrea inhabilitación inmediata para ejercer como agente o socio de estas empresas.

Requiere quórum calificado por regular:

- Limitaciones a la adquisición del dominio de bienes.
- Interés nacional conforme a la Constitución.
- Impide que ciertas personas adquieran propiedad de acciones en sociedades deportivas.

En concreto:

- Se regula que solo quienes cumplan con las disposiciones de esta ley pueden ser accionistas.
- Se prohíbe que agentes, mandatarios y socios de empresas de representación de jugadores adquieran propiedad en estas sociedades.
- La infracción conlleva la inhabilitación para actuar como agentes o socios de representación de jugadores.

MINUTA PROPUESTA INTERVENCIÓN EN SALA PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL SISTEMA REGISTRAL Y NOTARIAL EN SUS ASPECTOS ORGÁNICOS Y FUNCIONALES. BOLETÍN N° 12092-07

Hoy nos convoca este proyecto de ley en el que tuve la oportunidad de conocer y debatir durante el período legislativo pasado, como diputado. Desde esa experiencia, puedo decir que el trabajo llevado a cabo en este segundo trámite constitucional ha sido fundamental para perfeccionar las normas de este proyecto, cuyo objetivo central es impulsar una modernización real del sistema notarial y registral en Chile.

Así, este proyecto de ley, presentado el 11 de septiembre de 2018, busca actualizar un sistema vigente desde la promulgación del Código Civil en 1857. A lo largo de los años, este sistema ha sido un pilar de la seguridad jurídica.

Sin embargo, hoy debemos abordar los importantes desafíos que enfrenta nuestro sistema notarial, especialmente en términos de legitimidad. Es crucial asegurar la transparencia en el proceso de nombramientos, ya que esto no solo reduce la discrecionalidad del sistema, sino que también fomenta la competencia y garantiza que todos, sin importar su ubicación geográfica, tengan acceso a estos servicios. Asimismo, es fundamental regular adecuadamente las tarifas y precios, asegurándonos de cumplir con los estándares necesarios para ofrecer un servicio de calidad. Este esfuerzo no es solo un ejercicio administrativo; es una propuesta que busca resolver problemas que actualmente aquejan a nuestra ciudadanía.

Debemos tener presente que la verdadera finalidad de este proyecto es el de simplificar la vida de las personas, donde los servicios públicos deben estar al servicio de la gente.

En este contexto, valoro que el esfuerzo detrás de este proyecto se haya concentrado en proteger un elemento fundamental de nuestro sistema: la fe pública. Este principio es el pilar de la seguridad y certeza jurídica en el que la ciudadanía confía al recurrir a los documentos y actos emitidos por notarios y conservadores.

En relación a lo señalado es que paso a describir los aspectos que estimo necesario realzar:

1. Nuevo sistema de nombramiento

Este proyecto, se adelanta a una discusión que debemos abordar prontamente respecto al sistema de nombramientos en el Poder Judicial y, por lo mismo, resulta muy positivo. La propuesta, modifica el artículo 287 del Código Orgánico de Tribunales, trasladando el proceso de selección de auxiliares de la administración de justicia al Servicio Civil - siguiendo el modelo de los altos directivos públicos - y manteniendo la competencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto de una terna

seleccionada y con estándares objetivos de elección, como el hecho que uno de los postulantes obtenga un 10% superior al puntaje máximo y quien le sigue apareciere por debajo del 80% . Asegurando mayor objetividad y transparencia en los nombramientos.

- Agrega, además, una serie de inhabilidades para el Ejercicio de Funciones Notariales

Este aspecto es sumamente relevante, el tiempo nos dio la razón y se logró incorporar una norma que había quedado injustificadamente fuera de este proyecto de ley. Esto es, generar un marco robusto de prohibiciones e inhabilidades para ser seleccionado y/o nombrado en el cargo de conservador y notario y dichas causales se vinculan directamente al parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado o por adopción, respecto de quienes detentan el cargo de Presidente de la República, ministros y fiscales judiciales, ministros, subsecretarios, senadores y diputados, entre otras autoridades. Evitando generar condiciones donde pueda permear el conflicto de interés para el ejercicio de funciones notariales y registrales. Asimismo, fortalece el estándar de compliance estableciendo prohibiciones de contratación de parientes para el desempeño de funciones en su oficio o prestación de funciones.

- Asimismo, creo que se dio un paso positivo en orden a eliminar la figura del Fedatario.

Es innegable la genuina voluntad que estaba detrás de la figura del Fedatario, que buscaba flexibilizar el sistema y dotar de mayor competencia, pero lamentablemente no logró cumplir de manera efectiva con el objetivo central de este proyecto: garantizar la fe pública y la certeza jurídica de los actos que emanan de su función.

2. Destaco también, haber incorporado facultades administrativas en torno a la organización de los conservadores.

Recogiendo una propuesta de ley, que conjuntamente con el actual Ministro Elizalde presentamos, se incorpora al proyecto atribuciones al Presidente de la República para organizar los oficios conservatorios, separando cargos de notario y conservadores servidos por una misma persona y dividiendo territorios jurisdiccionales de un conservador en razón de su extensión, para crear un nuevo oficio.

3. Valoro, el fortalecimiento del rol del Ministerio de Justicia en la determinación de las tarifas estableciendo precios máximos a cobrar, junto con la incorporación de un nuevo rol del SERNAC

Así, mediante la introducción de un nuevo artículo 482 bis en el COT, el Servicio Nacional del Consumidor supervisará el cumplimiento de las disposiciones de la ley del consumidor, garantizando los derechos de los usuarios en el ámbito notarial y registral.

4. Todo lo anterior, sin dejar de destacar mejoras en la Calidad del Servicio, obligaciones en materia de transparencia, la incorporación de auditorías externas obligatorias en el caso de notarios y conservadores que superen un umbral de ingresos anuales, sin perjuicio de los procedimientos disciplinarios vigentes.

5. Finalmente, encontrándome de acuerdo con la regla que iguala el límite de edad al de los Ministros del Poder Judicial, evitando que estos cargos tengan el carácter de “vitalicios” hubiese preferido haber mantenido la regla transitoria de 2 años desde la entrada en vigencia de esta

exigencia para cesar en el cargo de notario y conservadores. No obstante, valoro que se haya mantenido una vacancia de 9 meses.

En concreto, este proyecto de ley es un claro avance para el sistema registral y notarial, que reafirma nuestro compromiso con la fe pública, la transparencia y la justicia. Al modernizar el sistema notarial y registral, estamos contribuyendo a construir un futuro más seguro y confiable para todos los chilenos. Por este motivo, aprobaré cada una de sus normas.

SOCIEDADES ANONIMAS DEPORTIVAS PROFESIONALES



SENADOR MATÍAS WALKER PRIETO

REFORMA A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS

- **RECONOCIMIENTO DE LOS DESAFÍOS ACTUALES:
ACTUAL AFECTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
MAYOR PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CLUBES
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**
- **COMPROMISO POLÍTICO PARA AVANZAR EN LAS REFORMAS
NECESARIAS**



CONOCIMIENTO BENEFICIARIOS FINALES

**INCERTIDUMBRE ACTUAL SOBRE LOS
VERDADEROS DUEÑOS DE LOS CLUBES**

**PROPUESTA: AUMENTAR FACULTADES DE LA
CMF**



PROHIBICIONES QUE HOY NO EXISTEN

EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS

**MAYOR REGULACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD
ACCIONARIA**

**SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE LIGAS
DEPORTIVAS Y FEDERACIONES**



MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE LOS HINCHAS

**PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE
LOS HINCHAS EN LA GESTIÓN DE CLUBES.**

**MODELOS INTERNACIONALES COMO
REFERENCIA (E.G., PROPIEDAD PARCIAL POR
HINCHAS)**



MUCHAS GRACIAS



SENADOR MATÍAS WALKER PRIETO